

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

PROCESO No:	11001-33-35-029-2019-00401 00
DEMANDANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
DEMANDADO:	FRANCISCO ALFONSO RHENALS GALVIS
CONTROVERSIA:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LESIVIDAD

ANTECEDENTES

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en contra del auto del diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022), mediante el cual se negó la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución PAP 008472 de 2020.

En su escrito la parte recurrente manifestó que, el acto administrativo mediante el cual se reconoció la pensión de vejez en favor del señor Rhenal Galvis, en cuantía de \$968.309.71, efectiva a partir del 1º de julio de 2009, viola la constitución y la ley, pues fue expedida con infracción de las normas en que debía fundarse, indebida aplicación de éstas y falsa motivación, lo que genera un detrimento diario a los colombianos, causando graves perjuicios económicos y de sostenibilidad financiera, al otorgársele al demandado una pensión especial que no le corresponde.

El acto administrativo que ordenó el pago de la pensión a favor del demandado, al haberse aplicado indebidamente la Ley 32 de 1986, Decreto 407 de 1994, y el Decreto 2090 de 2003, y otorgar dicha prestación sin ser beneficiario de dichas disposiciones legales, contrariando la Ley 100 de 1993, artículo 36 y el Acto Legislativo 1 de 2005, parágrafo transitorios 2 y 5, en razón a que el demandado, para el 1º de abril de 1994, no contaba con 15 años de servicio o 40 años o más de

edad, por lo que la disposición aplicable es la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 y el Decreto 2090 de 2003.

Así mismo, el apoderado de la entidad demandante, elabora un cuadro ilustrativo, en el cual se evidencia que el señor Francisco Alfonso Rhenals Galvis, nació el 20 de junio de 1965, que se vinculó a la entidad el 17 de noviembre de 1987, que laboró por 31 años en el INPEC, que la edad del demandado a 1º de abril de 1994 era de 28 años y nueve meses y que el tiempo de servicio a 1º de abril de 1994 era de 7 años, por consiguiente, concluye que, no es beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993.

Finalmente, indicó que el demandado cumplió los 20 años de servicio en cargos de excepción solo hasta el 17 de mayo de 2007, fecha posterior a la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003.

CONSIDERACIONES

Respecto de los anteriores argumentos, considera el Despacho que, en el presente asunto, se debe establecer no solo si el demandado es o no beneficiario del régimen de transición, sino además se debe determinar si por haber laborado en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, su labor debe ser considerada de alto riesgo, en caso afirmativo, se debe entrar a analizar si dicho personal, se encuentra excluido del cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Como quiera que al momento no existe certeza sobre la procedencia o no de la aplicación de los referidos requisitos para el personal que desempeñó actividades consideradas de alto riesgo, pues según lo establece el parágrafo transitorio 5º del artículo 48 de la Constitución Política, el cual reza:

“PARÁGRAFO TRANSITORIO 5o. <Parágrafo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005. El nuevo texto es el siguiente:> De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este

es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes."

En concordancia con lo anterior, el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 dispone:

"ARTÍCULO 140. Actividades de alto riesgo de los servidores públicos. De conformidad con la Ley 4a. de 1992, el Gobierno Nacional expedirá el régimen de los servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo, teniendo en cuenta una menor edad de jubilación o un número menor de semanas de cotización, o ambos requisitos. Se consideran para este efecto como actividades de alto riesgo para el trabajador aquellas que cumplen algunos sectores tales como el cuerpo de custodia y vigilancia nacional penitenciaria. Todo sin desconocer derechos adquiridos.

El Gobierno Nacional establecerá los puntos porcentuales adicionales de cotización a cargo del empleador, o del empleador y el trabajador, según cada actividad."

No se repondrá la decisión de negar el decreto de la medida cautelar solicitada por la parte demandante, consistente en suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo demandado.

Respecto del recurso de apelación interpuesto contra el auto del 10 de febrero del presente año; se dispone concederlo para ante el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca (reparto), de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021.

En consecuencia, se ordenará que, por Secretaría del Despacho, se remita el expediente al superior para lo de su competencia.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Veintinueve (29) Administrativo Oral de Bogotá - Sección Segunda**,

RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER la decisión contenida en el auto del diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022), mediante el cual se negó el decreto de la medida cautelar solicitada por la parte demandante, consistente en suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo demandado.

SEGUNDO: CONCEDER en el efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 10 de febrero del presente año; por Secretaría remítase el expediente al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca (reparto), de conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 244 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – modificado por el artículo 64 de la Ley 2080 de 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

JFBM

Demandante	wlozano@ugpp.gov.co
Demandado	pensionsegura@abogadospsa.com
Vinculado	notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co

JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA

Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior

Hoy diecinueve (19) de agosto de 2022 a las 8:00 a.m.

SECRETARIA